

INFORME

del:	Presidente del Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia
a los:	Miembros de la Convención
Asunto:	Informe final del Círculo de debate sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia

1. Atendiendo al marco de los trabajos establecido por el Praesidium (véase Anexo), el círculo de debate ha mantenido cuatro reuniones, los días 17 y 24 de febrero y 3 y 17 de marzo de 2003. Ha oído al Sr. Martínez Iglesias, Presidente del Tribunal de Justicia, al Sr. Vesterdorf, Presidente del Tribunal de Primera Instancia, y a una delegación del Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE) compuesta por Lord Brennan QC y por los Sres. Berrisch, Brouwer, Kahn y Waelbroeck.
2. El círculo de debate se planteó también si convenía examinar la cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia con respecto a los actos de la Unión relativos a los ámbitos de la PESC¹, a raíz de la supresión de los pilares. En la reunión del 17 de marzo de 2003 se convino en que el círculo examinaría este aspecto en una reunión posterior y en que, llegado el caso, podría transmitir propuestas más adelante y con independencia del presente informe.
3. Las presentes conclusiones se refieren a los puntos incluidos en el marco de los trabajos, siguiendo el orden de éstos.

¹ Por lo que respecta a la JAI, el círculo ha tomado nota de las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo X "Libertad, seguridad y justicia".

Sobre la cuestión a) del marco de los trabajos

4. El círculo examinó las disposiciones del Tratado de Niza sobre el número de jueces y abogados generales en lo relativo al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia. El círculo estimó que dichas disposiciones deberían mantenerse sin cambios a este respecto¹.
5. Por lo que se refiere al procedimiento de designación de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, "el Tribunal") y del Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, "el TPI"), la mayoría de los miembros del círculo está a favor del mantenimiento de la situación actual (designación de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros). Sin embargo, algunos miembros opinaron que esta designación debería realizarse mediante un acto del Consejo, y, para varios de éstos, dicha institución debería actuar por mayoría cualificada.
6. Por lo demás, el círculo consideró conveniente que se creara un "comité consultivo", cuya función sería la de proporcionar a los Estados miembros un dictamen sobre la idoneidad del perfil de un candidato para el ejercicio de sus funciones, basándose en particular en criterios objetivos relativos a su cualificación profesional. Podrían participar en dicho comité, cuyas deliberaciones no serían públicas y que no efectuaría audiciones, ex miembros del Tribunal, representantes de las instancias supremas nacionales, pudiendo también el Parlamento Europeo designar a un experto jurídico. No obstante, un miembro declaró estar en contra de la idea de asociar al Parlamento Europeo por considerar que ello entrañaría un riesgo de politización del procedimiento de designación. El círculo destaca que la instauración de ese comité consultivo podría reforzar el nivel de exigencia de los Estados miembros en la presentación de los candidatos. En estas condiciones, el círculo estimó que los Estados miembros deberían seguir presentando una sola candidatura.

¹ En este contexto, es preciso reflexionar acerca del mantenimiento, después de la ampliación, del número actual de 11 jueces que componen la Gran Sala creada por el Tratado de Niza (párrafo segundo del artículo 16 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia).

7. Por lo que atañe a la duración del mandato del Tribunal, el círculo tomó buena nota de que tanto el Presidente del Tribunal como el del TPI, pese a preferir el actual sistema, se mostraron abiertos a la posibilidad de establecer un mandato más largo y que no sea renovable. Si este fuera el caso, expresaron su preferencia por un mandato de 12 años puesto que un mandato de 9 años no renovable podría generar importantes problemas prácticos, en particular, con motivo de la renovación de la mitad del Tribunal cada cuatro años y medio. El círculo señala que, especialmente en el contexto de un mandato no renovable, sería preciso decidir cuál será la duración del mandato de un juez que sustituye a otro en caso de defunción o dimisión^{1 2}. Además, la designación se refiere a la función, por lo que no se excluiría el supuesto de que un abogado general (o un juez) pudiera ser nombrado juez (o abogado general).
8. El círculo considera que la Constitución podría establecer una distinción entre el sistema de mandato para el Tribunal de Justicia y para el TPI. La mayoría de los miembros del círculo se mostró favorable a la prolongación del mandato de los miembros del Tribunal y a que éste no sea renovable. No obstante, otros miembros pusieron de manifiesto que el sistema actual había funcionado bien y que sería preferible mantenerlo. En cualquier caso, el círculo propuso que en este contexto el Tratado mencionara explícitamente la independencia e imparcialidad de los jueces. Por lo que respecta a los jueces del TPI, el círculo está de acuerdo en que se mantenga el sistema actual (mandato de seis años, renovable).

¹ O bien este mandato terminaría coincidiendo con el mandato del juez sustituido, o bien se contemplaría expresamente la posibilidad de renovación, o bien el mandato del juez sustituto daría comienzo en el momento de su designación por un período completo.

² Por otra parte, el círculo querría destacar también el hecho de que, en el momento de la entrada en vigor de dicho sistema, cabría preguntarse por las consecuencias en relación con los mandatos que están en curso en la actualidad.

Sobre la cuestión b) del marco de los trabajos

9. El círculo ha acogido favorablemente la idea de una modificación de los artículos 225 A, 229 A y 245 del TCE. Los miembros se han mostrado abiertos a la posibilidad de disponer que el Consejo decida por mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad conforme a la norma actual. Tal sería el caso, en particular, del artículo 225 A del TCE, relativo a la creación de salas jurisdiccionales.
10. Con respecto al artículo 229 A del TCE, la mayoría de los miembros se ha mostrado igualmente, en principio, favorable a que el Consejo decida por mayoría cualificada.
11. Por último, en relación con el artículo 245 del TCE, relativo al Estatuto del Tribunal de Justicia, esta disposición prevé actualmente una decisión del Consejo por unanimidad, excepto para el título I del Estatuto, que sólo podrá modificarse mediante el procedimiento de revisión del tratado. A este respecto, el círculo propugna, en principio, una modificación del artículo 245 del TCE en el sentido de que el Consejo actúe por mayoría cualificada, salvo en relación con el título I y con las cuestiones lingüísticas (artículo 64 del Estatuto), en que debería pronunciarse por unanimidad. Sobre las cuestiones lingüísticas, algunos miembros destacaron que debería modificarse la práctica actual del Tribunal, según la cual éste sólo dicta sentencia en un asunto si se traduce a todas las lenguas; se podría publicar la sentencia en la lengua de procedimiento, y las demás versiones lingüísticas podrían estar disponibles en el plazo de los seis meses siguientes, sin que fuera preciso modificar el Tratado para este cambio de práctica.
12. El círculo consideró que el procedimiento legislativo debería ser de aplicación para las citadas disposiciones. Un miembro destacó que podía aceptar que el Consejo se pronunciara por mayoría cualificada, sin necesidad de que se aplicara el procedimiento legislativo.

Sobre la cuestión c) del marco de los trabajos

13. Por lo que atañe a las denominaciones del Tribunal y del TPI, el círculo estima que no debe modificarse la denominación del Tribunal sino solamente adaptarse al hecho de que ya no existirán "Comunidades Europeas". El círculo ha sido sensible al hecho de que la denominación del Tribunal existe desde hace 50 años, y que no sería oportuno introducir cambios. Así pues, la denominación del Tribunal podría ser "**Tribunal de Justicia de la Unión Europea**".

14. En lo que se refiere a la denominación del TPI, el círculo observa que en un futuro próximo, cuando se creen salas jurisdiccionales para determinados tipos de litigios, este tribunal no será de primera instancia en todos los casos, sino que podrá pronunciarse asimismo en última instancia. Así pues, la actual denominación ya no será apropiada. Ahora bien, en el caso de todos los recursos directos que no entren en la competencia de las salas jurisdiccionales, el TPI se pronunciará en primera instancia. En tales condiciones, el círculo propone que se modifique la denominación del TPI, al tiempo que aboga por que se evite toda posible confusión con el Tribunal. Habida cuenta de estos elementos, así como de la necesidad de hallar una denominación que no dé lugar a problemas de traducción, el círculo propuso que se utilizara la de **"Tribunal General de la Unión Europea"**¹, con el fin de expresar la vocación de este tribunal de convertirse en el tribunal de base de carácter general y diferenciarlo de los "tribunales especializados". Quedó entendido que la nueva denominación debería en cualquier caso salvaguardar la unicidad de la Institución. El círculo consideró útil que su Presidente invitara a los servicios jurídicos de las tres instituciones a que le enviaran sus sugerencias acerca de la denominación adecuada para el TPI.
15. Por lo que respecta a las salas jurisdiccionales previstas en el artículo 225 A, su cometido es conocer en primera instancia de ciertas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Por el momento no se ha creado ninguna de estas salas, aunque está prevista la creación de una para los recursos de agentes de la Unión y otra para los títulos comunitarios de propiedad industrial (patentes). Podrá estudiarse la creación de otras en el futuro. Cabría mantener la denominación actual, lo que no impediría denominar "tribunales" a dichas salas, como en el caso del "Tribunal de la Patente Comunitaria" fruto del acuerdo político del Consejo de 3 de marzo de 2003. Con todo, parece preferible denominarlos **"tribunales especializados"**. Esta denominación tendría la ventaja de evitar la confusión, en determinadas lenguas, con las "salas" destinadas a algunos contenciosos específicos que podrían crearse dentro del Tribunal (o del TPI), como es el caso dentro de los tribunales supremos de los Estados miembros.
16. Por último, el círculo considera que en la Constitución se podría indicar explícitamente que la Unión dispone de un sistema judicial del que forman parte el Tribunal de Justicia, el TPI, los tribunales especializados y los jueces nacionales, cuya función de jueces de derecho común de la Unión podría ponerse de relieve en la Constitución. No obstante, el círculo observa que

¹ ("Common Court of the European Union"; "allgemeines Gericht der Europäischen Union", etc.)

dicha propuesta no implica la creación de nuevas instituciones y que el Tribunal de Justicia seguiría siendo el centro del sistema judicial de la Unión, debiendo mantenerse la unidad institucional.

Sobre la cuestión d) del marco de los trabajos

17. En lo tocante a las posibles modificaciones que deberán efectuarse en el párrafo cuarto del artículo 230 del TCE, el círculo ha estudiado diversas opciones posibles basándose en un documento de trabajo elaborado por la Secretaría.
18. A raíz del debate se ha observado que existía una clara división del círculo en dos grupos de miembros. El primero de estos considera que la actual formulación de esta disposición satisface los requisitos esenciales de la tutela judicial efectiva de los derechos de los justiciables, habida cuenta de que, en el actual sistema descentralizado inspirado en el principio de subsidiariedad, son sobre todo los órganos jurisdiccionales nacionales los que deben defender los derechos de los particulares, y que podrían (o deberían, si se trata de la última instancia) plantear preguntas prejudiciales al Tribunal sobre la validez de un acto de la Unión; por consiguiente, no sería necesario introducir modificaciones sustanciales en el párrafo cuarto del artículo 230 del TCE. Para dichos miembros resultaría adecuado, por el contrario, que la Constitución mencionara explícitamente que, con arreglo al principio de cooperación leal, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar y aplicar en la medida de lo posible las normas internas de procedimiento que regulan el ejercicio de los recursos, de forma que las personas físicas y jurídicas puedan impugnar ante los tribunales la legalidad de toda decisión u otra medida nacional relativa a la aplicación, en lo que a aquéllas incumbe, de un acto de la Unión de alcance general, alegando la invalidez del mismo. En efecto, corresponde a los Estados miembros establecer un sistema de vías de recurso y procedimientos que permitan garantizar el respeto del derecho de los particulares a una protección jurisdiccional efectiva para los derechos derivados del Derecho de la Unión¹.

¹ TJCE, sentencia del 25 de julio de 2002, asunto C-50-00 P, Unión de Pequeños Agricultores, puntos 41 y 42.

19. En opinión del segundo grupo, las condiciones de admisibilidad previstas en el párrafo cuarto del artículo 230 ("que les afecten directa e individualmente") para los recursos de particulares contra actos de alcance general son excesivamente restrictivas. Así pues, algunos miembros han propugnado en particular las siguientes propuestas:
- a) disociar ambas condiciones, que dejarían de ser acumulativas;
 - b) sustituir "e individualmente" por "y que afecten a su situación jurídica";
 - c) mantener la formulación actual añadiendo "o contra los actos de alcance general que le afecten directamente sin que conlleven una medida de ejecución";
 - d) mantener la formulación actual para los actos legislativos (en lo sucesivo, leyes y leyes marco) y permitir el recurso ante el Tribunal para los actos reglamentarios; estos últimos podrían recurrirse toda vez que un particular se vea afectado directa o individualmente;
 - e) la misma alternativa anterior, aunque abriendo una posibilidad de recurso de particulares contra los actos legislativos de la Unión que no conlleven una medida de ejecución;

Algunos miembros¹ propusieron la instauración de un recurso específico para la defensa de los derechos fundamentales, conjuntamente con la propuesta de la letra a).

20. La mayoría de los miembros del círculo se pronunció a favor de una modificación del párrafo cuarto del artículo 230, en el sentido de la siguiente fórmula:

"Toda persona física o jurídica podrá interponer, en las mismas condiciones, recurso contra los actos de los que sea destinataria o que le afecten directa e individualmente, así como contra los actos [de alcance general/reglamentarios] que le afecten directamente y que no impliquen medidas de ejecución".

21. El propósito del añadido de "y que no impliquen medidas de ejecución" es limitar el derecho de recurso de los particulares exclusivamente a los casos (problemáticos) en que el particular debe quebrantar en primer lugar el Derecho para poder acceder posteriormente a la justicia. Efectivamente, esta fórmula permite a los particulares recurrir ante el Tribunal (TPI) un acto que contenga hipotéticamente una prohibición y que no conlleve medidas de ejecución, en la medida en que el particular puede solicitar su anulación si consigue demostrar que el acto reglamentario de que se trata le afecta directamente.

¹ Véase WD 3 de M. Meyer.

22. La mayoría de los miembros que desean una modificación del párrafo cuarto del artículo 230 prefiere la opción que menciona los "actos de alcance general". Sin embargo, algunos miembros consideraron más adecuado optar por la formulación "acto reglamentario", lo que permite introducir una distinción entre actos legislativos y actos reglamentarios manteniendo un enfoque restrictivo –el Presidente del Tribunal lo había, por cierto, sugerido– en lo tocante a los recursos de particulares contra los actos legislativos (para los que sigue aplicándose el requisito de que "les afecten directa e individualmente") y se prevé un enfoque más abierto para los recursos contra actos reglamentarios.
23. Por otra parte, y atendiendo a una propuesta en tal sentido, el círculo parece estar abierto a una modificación meramente de redacción que no modifique el alcance del párrafo cuarto del artículo 230, que consistiría en la supresión de las palabras "aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona". Se ha solicitado, además, la sustitución de la palabra "decisión" por "acto". Estas modificaciones reflejan la jurisprudencia del Tribunal¹.
24. En relación con la aplicación de las disposiciones del artículo 230 del TCE a las agencias y órganos de la Unión, el círculo observa que, en general, los actos por los que se crean agencias contienen disposiciones que establecen vías de recurso ante el Tribunal de Justicia frente a los actos jurídicos adoptados por dichas agencias². El análisis de dichos actos –que afectan esencialmente a agencias y órganos dependientes del Tratado CE– actos permite comprobar que se presentan diversos supuestos:
- se prevé en una disposición que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre los recursos presentados contra la agencia en las condiciones que se contemplan en el artículo 230³;

¹ Véase, a este respecto, el Asunto 60/81, IBM/Comisión (Rec. 1981, 2639, párrafo 9): "por consiguiente, para determinar si las medidas impugnadas constituyen actos a efectos del artículo 173 hay que atender a su naturaleza sustancial. Según jurisprudencia reiterada, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada la situación jurídica de éste, constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación en el sentido del artículo 173 del Tratado; en cambio, la forma en la que se adoptan los actos o decisiones resulta, en principio, indiferente en lo que respecta a la posibilidad de impugnarlos mediante un recurso de anulación".

² Véase, a este respecto, el documento de trabajo de la Secretaría sobre el derecho de recurso contra actos de las agencias de la Unión (WD 9).

³ Tal es el caso del Reglamento (CE) n° 1035/97 del Consejo de 2 de junio de 1997 por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (artículo 15) (DO L 151 de 10.06.1997, p. 1).

- se prevé en una disposición que todo acto de la agencia, implícito o explícito, podrá ser recurrido ante la Comisión con miras a controlar su legalidad, sobreentendiéndose que posteriormente se podrá interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión¹;
- el acto no menciona la cuestión del control de la legalidad de los actos de la agencia².

25. Habida cuenta de la heterogeneidad de las prácticas en materia de control de la legalidad de los actos de las agencias en el marco del Tratado CE, la Comisión³ recomendó al Parlamento Europeo y al Consejo que uniformaran el sistema haciendo que el artículo 230 del TCE se aplique a los actos que agoten la vía administrativa de todas las agencias. El argumento en que se sustenta este planteamiento es, esencialmente, que el principio de tutela judicial efectiva, consagrado mediante jurisprudencia reiterada (y recogido actualmente en el artículo 47 de la Carta), exige que ningún acto que agote la vía administrativa de una institución, órgano u agencia pueda sustraerse al control jurisdiccional de su legalidad. Por lo demás, resulta imposible excluir categóricamente, en el momento de crear una agencia, que la misma vaya a adoptar ese tipo de actos, aun cuando el reglamento por el que se cree no prevea la competencia para adoptar decisiones en sentido formal.
26. Visto lo anterior, una mayoría de los miembros del círculo recomienda que se modifique el artículo 230 del TCE para que abarque, además de los actos jurídicos adoptados por las instituciones, los de los *órganos* y *agencias* de la Unión. Se sobreentiende que un recurso interpuesto contra un órgano o agencia sólo será admisible en caso de que éstos hayan adoptado un "acto jurídico" a tenor de la jurisprudencia del Tribunal; por otra parte, el acto de creación de la agencia podría precisar las modalidades concretas de control de la agencia o el órgano de que se trate⁴. Se destacó que esta orientación del círculo sólo se refería a los órganos y agencias dependientes del Tratado CE, ya que los que actúan en el marco de la PESC y de la cooperación policial y judicial en materia penal han de ser examinados mediante

¹ Véase el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo (artículo 22).

² Véase el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

³ Véase COM 2002(718) final de 11.12.2002, titulada "El encuadramiento de las agencias reguladoras europeas", p. 14 y 15.

⁴ En particular por lo que respecta a la posibilidad de que el Tribunal reforme un acto impugnado (caso de la Oficina de Marcas), o a las personas que tendrán capacidad para interponer un recurso (ej. Oficina de Marcas u Oficina comunitaria de variedades vegetales), o a la necesidad de presentar un recurso previo ante la Comisión, si se opta por mantener este sistema particular.

las disposiciones de dichas políticas al ser susceptibles de presentar determinadas particularidades que podrían regularse en los actos por los que se establecen dichos órganos o agencias. Un miembro del círculo declaró que no estaba en condiciones de suscribir la recomendación general del círculo sobre este punto, argumentando que ésta tenía implicaciones importantes y debería examinarse más adelante, teniendo en cuenta las particularidades de cada agencia.

27. Por último, algunos miembros solicitaron que se modificara el artículo 230 TCE para incluir en él un derecho de recurso de los parlamentos nacionales, del Comité de las Regiones o de las regiones en materia de subsidiariedad. No obstante, el círculo acordó a este respecto que se trataba de cuestiones ya examinadas por la Convención, y que correspondería al Praesidium, más que al círculo, extraer, llegado el caso, las consecuencias de las posibles orientaciones de la Convención para la redacción de las modificaciones que han de introducirse en el artículo 230 TCE.

Sobre la cuestión e) del marco de los trabajos

28. Por lo que respecta al mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento de una sentencia del Tribunal, los miembros observan que el sistema actual no es suficientemente eficaz, dado que pueden transcurrir años hasta que se impone una sanción pecuniaria a los Estados condenados por el Tribunal. El círculo considera pues que deben hallarse medios para lograr mayores eficacia y simplicidad de los mecanismos de sanciones por incumplimiento de las sentencias del Tribunal. A tal fin se presentaron las sugerencias siguientes:
- a) reforzar el mecanismo de sanciones previsto en el artículo 228 del TCE, suprimiendo las dos fases que anteceden a la presentación de un recurso ante el Tribunal para que éste imponga sanciones, a saber, la fase de presentación de observaciones por el Estado afectado y la fase de dictamen motivado de la Comisión, o al menos una de esas dos fases¹; una amplia mayoría declaró estar a favor de esta propuesta.
 - b) atribuir a la Comisión la posibilidad de presentar ante el Tribunal, *al mismo tiempo* (en el mismo procedimiento), un recurso por incumplimiento a tenor del artículo 226 del

¹ Esta presentación directa al Tribunal por la Comisión, o por un Estado miembro, no constituye una novedad: ya está prevista en el Tratado para ciertos casos como, por ejemplo, si un Estado abusa de las excepciones previstas por motivos de defensa o para casos de crisis (artículo 298).

TCE y una petición de que se imponga una sanción. En caso de que, a petición de la Comisión, el Tribunal impusiera la sanción en la misma sentencia condenatoria, dicha sanción se aplicaría transcurrido cierto plazo a contar desde la fecha de la sentencia¹, en caso de que el Estado demandado no se atuviera a lo dispuesto en la sentencia. La mayoría de los miembros se pronunció a favor de esta propuesta. Este sistema permitiría aligerar y acelerar el procedimiento de sanción, en particular en los casos de "no comunicación" de una medida nacional de incorporación².

- c) atribuir a la Comisión el derecho de constatar un incumplimiento de un Estado de una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución, tras ofrecer a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Éste dispondría del derecho de introducir un recurso ante el Tribunal solicitando la anulación de la decisión de la Comisión. Este modelo se inspiraría en el artículo 88 del Tratado CECA.

¹ En opinión de algunos, el importe de la sanción (multa coercitiva) debería calcularse en este caso de forma que la multa surgiese efecto con carácter retroactivo, a partir de la fecha de la sentencia.

² En la práctica, cabe distinguir estos casos de "no comunicación" (a saber, los casos en que el Estado miembro no ha adoptado ninguna medida de incorporación) de los casos de incorporación incorrecta (a saber, en opinión de la Comisión las medidas de incorporación adoptadas por el Estado miembro no se ajustan a la directiva (o ley de bases)). El sistema propuesto no se aplicaría a este segundo supuesto.

ANEXO

Marco de los trabajos

1. Los debates de la sesión plenaria de los días 5 y 6 de diciembre de 2002 y 20 y 21 de enero de 2003 pusieron de relieve la preocupación de algunos miembros de la Convención en cuanto a la necesidad de proceder a un examen serio de las implicaciones que determinadas propuestas presentadas en la Convención podrían tener en el funcionamiento del Tribunal de Justicia. Además se consideró importante ofrecer a éste y al Tribunal de Primera Instancia la ocasión de expresar su opinión sobre las cuestiones que les afectan y que son objeto de los trabajos de la Convención. A tal fin, el Praesidium consideró conveniente crear un "círculo de debate" sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia.
2. Este círculo debería ocuparse en particular de las cuestiones sobre las que la Convención no ha tomado aún posición, y en particular podría analizar los puntos siguientes:
 - a) ¿Debe modificarse el procedimiento de designación de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia (artículo 223 CE)? ¿Y de designación de los miembros del TPI (artículo 224 CE)?
 - b) A fin de facilitar la aplicación de los artículos 225 A, 229 A y 245 TCE, ¿es necesario sustituir la norma de la unanimidad vigente en la actualidad por la de la mayoría cualificada?
 - c) ¿Sería conveniente revisar la denominación del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia o se deberían mantener las denominaciones actuales?
 - d) ¿Debería modificarse la redacción del cuarto párrafo del artículo 230 CE concretamente a propósito de los recursos directos de los particulares contra actos de alcance general de las Instituciones? ¿Y contra los actos de agencias u órganos creados por la Unión?
 - e) ¿Habría que hacer más eficaz el mecanismo de sanciones en caso de incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia? ¿Cómo? ¿Dando al Tribunal la posibilidad de imponer multas en sus sentencias cuando un Estado miembro no las cumpliera en un plazo determinado? ¿Por otros medios?
3. El "círculo de debate" estaría abierto a otras cuestiones que sus miembros o los miembros del Tribunal y del TPI estimaran conveniente analizar. Está previsto que el "círculo de debate" se reúna 3 o 4 veces durante el mes de febrero y presente su informe a comienzos de marzo de 2003.